



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

<b>DEMANDANTE</b>	JHON FREDY CARTAGENA ALCARAZ
<b>DEMANDADA</b>	MULTIJARA S.A.
<b>ORIGEN</b>	Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín
<b>RADICADO</b>	05 001 31 05 014 – <b>2009-00210-01</b>
<b>TEMAS</b>	Prestaciones sociales, indemnizaciones y gastos médicos
<b>CONOCIMIENTO</b>	Apelación
<b>ASUNTO</b>	Sentencia de segunda instancia

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 15 del Decreto 806 de 2020 se constituye en audiencia para proferir sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JHON FREDY CARTAGENA ALCARAZ contra MULTIJARA S.A.

**I. ANTECEDENTES**

**Hechos y pretensiones de la demanda<sup>1</sup>**

El señor Jhon Fredy Cartagena Alcaraz formula demanda contra Multijara S.A., pretendiendo el pago de **i)** cesantías, primas de servicio, vacaciones e intereses doblados sobre las cesantías; **ii)** indemnización material y moral de perjuicios derivada de accidente de trabajo; **iii)** indemnización por pérdida de capacidad laboral; **iv)** indemnización por falta de pago; **v)** gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios asumidos por el trabajador; y **vi)** costas y gastos del proceso.

Fundamentó sus pretensiones en que laboró para la demandada entre el 26 de enero de 2008 y el 4 de agosto del mismo año, desempeñando oficios varios, por el cual percibía el salario mínimo legal. El 09 de abril de 2008 sufrió accidente de trabajo

<sup>1</sup> Fls.3/4

cuando al encontrarse bajando un andamio, perdió el equilibrio y se cayó, lo que ocasionó dislocación de hombro, fractura de costilla y perforación de pulmón. Nunca le fueron suministrados elementos de protección personal tales como un cinturón de seguridad. A raíz del accidente, su brazo derecho no le sirve, padece constante dolor en la columna y en los testículos. Su atención médica fue cubierta por él ante el Hospital San Rafael de Itagüí -sede 1-. No le fueron canceladas cesantías, primas de servicio, vacaciones, ni intereses a las cesantías. No fue afiliado al Sistema de Riesgos Laborales.

### **Oposición a las pretensiones de la demanda<sup>2</sup>**

El demandante prestó su servicio como ayudante de construcción, entre el 28 de enero de 2008 y el 3 de agosto del mismo año, bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios. Devengó el equivalente a un salario mínimo mensual legal más auxilio de transporte y un porcentaje de prestaciones sociales del 24%, percibiendo neto \$642.850, en pagos semanales de \$150.000. Padeció el accidente al bajarse apresuradamente para ir a almorzar, acordando entre las partes que seguiría percibiendo su ingreso a título de incapacidad, mientras así lo determinaban los médicos tratantes, con la condición de que la demandada asumiera los gastos médicos y así ocurrió. Sí contaba con elementos de seguridad y protección tales como cascos de seguridad, arnés, cuerdas y lazos para amarrarse, entre otros, insistiéndose constantemente en la obligación de usarlos. No son ciertas las secuelas que se narran en los hechos de la demanda; al renunciar, el demandante presentó examen médico de egreso para iniciar labores en otra empresa, cuyo resultado indicó que presentaba limitación funcional leve postraumática en hombro derecho, recomendándosele continuar con terapias. Además de asumir los gastos surgidos con ocasión del accidente, se hicieron anticipos al demandante y adquirió el compromiso de pagar ante el Hospital San Rafael de Itagüí, factura N°0983239 por valor de \$2.425.475 del 16 de abril de 2008. Sí se pagaron prestaciones sociales a la terminación del contrato, negándose el demandante a firmarla, ante la deducción de la totalidad del valor, por unos préstamos que se le habían hecho, quedando un saldo a cargo del señor Cartagena Alcaraz por \$503.168, que no ha cancelado. La prima fue pagada el 21 de junio de 2008. Formuló como excepción previa la de pago oportuno.

### **Sentencia de primera instancia<sup>3</sup>**

El 16 de noviembre de 2012, el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín profirió sentencia, mediante la cual declaró que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 28 de enero de 2008 y el 31 de julio del mismo año. Condenó a la demandada al pago de \$2.400.000, por concepto de incapacidad permanente parcial y \$313.923, como indexación que dispuso recalcular al momento del pago. Adicionalmente, le impuso el pago de costas procesales, fijando como agencias en derecho \$678.480, absolviéndola de las restantes pretensiones invocadas en su contra.

---

<sup>2</sup> Fls.59/62.

<sup>3</sup> Fls.253/259.

De la prueba recibida, concluyó que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido cuyo extremo temporal inicial fue confesado por la demandada y finalizó con la renuncia del trabajador, quien confesó haber devengado un salario de \$600.000 mensuales. Las prestaciones sociales fueron liquidadas, pero no se aportó prueba del pago al final del contrato; pese a ello, a fls.89 obra documento en que se plasmó el pago de media prima y un adelanto de prestaciones sociales por \$1.020.000, autorizando el trabajador el descuento de \$720.000. Como se causaron por prestaciones \$781.105, coligió que el anticipo fue muy superior a esa suma, no adeudándose dinero por la empleadora por ese concepto.

Concluyó que el accidente padecido por el trabajador fue laboral, presentando una pérdida de capacidad laboral del 9.27%, estructurada el 9 de abril de 2008, más no encontró acreditada la culpa de la empleadora, si no el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad en el trabajo. Le impuso la obligación de pago de la indemnización derivada de la pérdida de capacidad laboral, por no haber afiliado al trabajador a una ARL, sin que haya lugar a condenar al pago de gastos médicos, porque el trabajador no acreditó haber asumido ninguno, siendo la demandada quien los cubrió.

#### **Apelación de la parte demandante<sup>4</sup>**

Parcialmente inconforme con la decisión, la parte demandante la recurre, solicitando su modificación y revocatoria parcial, así: i) Según confesó la demandada al responder al hecho primero de la demanda, los extremos temporales fueron el 28 de enero de 2008 y el 3 de agosto del mismo año, fecha de la cual también obra prueba documental a fl.145 del expediente; ii) el salario, también confesado por la demandada, ascendió a \$642.850, no a \$600.000 como lo adujo el A-quo; iii) La demandada no acreditó el pago de las prestaciones sociales definitivas del trabajador, por tanto adeuda \$350.644 por cesantías, \$21.740 por intereses a las cesantías, \$350.644 por prima de servicios y \$175.322 por vacaciones. El demandante no elaboró, ni conservó los recibos de pago comprobantes de egreso, por tanto, no pudo tachar los presentados por la demandada. **Los que se presentan como documentos que contienen deudas del demandante realmente obedecen a deudas del representante legal de la sociedad o a préstamos o anticipos que se hicieron por ella para que el trabajador asumiera los gastos derivados de su accidente, sin que se presentara documento en que de su puño y letra, el trabajador autorizara descuento alguno de la liquidación de prestaciones sociales finales;** iv) al no pagarse dicha liquidación, se adeuda la indemnización deprecada en la demanda; v) también se adeuda la indemnización derivada de la culpa patronal en la ocurrencia del accidente del trabajador porque se acreditó el desconocimiento de la obligación preventiva a cargo de la empleadora al permitir un procedimiento riesgoso -actividad en alturas-, sin suministrar los medios de protección necesarios, siendo estos un arnés o una cuerda de vida y no guantes o casco que fue lo afirmado por los testigos.

---

<sup>4</sup> Fls.264/274.

El juez no debió otorgar credibilidad a las declaraciones de Héctor Mario Caro Rivera, pues siendo compañero del demandante, desconocía su fecha de inicio de labores, dijo entregar los elementos de protección, pero desconocía cuáles fueron. De otro lado, el testigo Calos Eduardo Henao, también compañero de labores del demandante y quien lo acompañó al servicio médico el día del accidente, manifestó que no tenía elementos de protección, que se le suministró sólo un casco, declaración que coincide con la de Fabián Alberto Osorio Acevedo. La demandada no los afilió a riesgos laborales, ni acreditó la existencia de un plan de salud ocupacional y seguridad industrial; vi) Solicitó que **se modifique la condena impuesta al pago incapacidad por pérdida de capacidad laboral con base en la pérdida del 9.27% y no del 9%, aplicando un monto de 4.12 y no de 4**; vii) Finalmente indicó que las costas deben tasarse en el 100% porque proceden todas las pretensiones.

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

Una vez corrido el traslado para alegar de conclusión en esta instancia, la parte demandante se abstuvo de descorrerlo.

La demandada por su parte, los describió oportunamente, pronunciándose frente a los puntos de apelación del demandante; indicando que se acreditó el pago de las prestaciones sociales definitivas, incluso de manera anticipada a la terminación del contrato, adeudando el trabajador la suma de \$503.168. Éste no acreditó la culpa patronal de la que se deriva el pago de una indemnización material y moral de perjuicios por la ocurrencia del accidente por él padecido. Se demostró la entrega de elementos de protección, sin que por las funciones desempeñadas a nivel de piso por el señor Cartagena Alcaraz, éste requiriera del suministro de arnés o cuerdas, pues no estaban sujetos a cuerdas permanentemente. Asimismo, la empleadora realizaba reuniones semanales con los trabajadores para impartir instrucciones y hacer seguimiento a las mismas, entre las cuales se encontraba el uso de elementos de seguridad, recibiendo sanciones, aquellos que incumplieran las directrices. Refirió a algunas declaraciones puntuales para reafirmar sus dichos, señalando que demostró un actuar diligente y cuidadoso. Se opone a la condena al pago de indemnización por la pérdida de capacidad laboral del trabajador, porque a pesar de no haberlo afiliado a una ARL, asumió los gastos médicos derivados del accidente padecido por él, no presentándose daño emergente, ni lucro cesante. Tampoco procede la indemnización por falta de pago de las prestaciones sociales, por haberlas cancelado, o al pago de gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios, porque fueron previamente asumidos por la demandada, según se probó con la documental allegada al proceso y la confesión del demandante. Finalmente aseguró que las costas del proceso deben ser asumidas por la parte demandante, pues las pretensiones de la demanda no deben prosperar y su actuación resulta temeraria<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Fls.278/284.

## II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del CPTSS.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada, se tiene que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: a) el extremo temporal final del contrato de trabajo que existió entre las partes; b) si hay o no lugar al pago de prestaciones sociales y vacaciones a cargo de la demandada, así como a la consecuencial indemnización en caso de no haberse satisfecho; c) indemnización de perjuicios derivada de una culpa patronal en la ocurrencia del accidente padecido por el trabajador; d) valor de la indemnización por incapacidad permanente parcial del demandante.

La Sala se abstendrá de pronunciarse en torno al valor de agencias en derecho fijado en la sentencia, por no ser el momento procesal oportuno para ello. Igualmente se abstendrá de pronunciarse en torno a la imposición de condenas ordenadas en la primera instancia a cargo de la demandada, diferentes a las relacionadas en la apelación del demandante, por cuanto, **la demandada no formuló recurso de apelación contra la providencia** que pretende atacar en esos puntos, incluyéndolos sólo al descorrer el traslado para alegar en segunda instancia, no siendo ésta última la oportunidad para apelarlos.

No se atribuye valor probatorio alguno a la documental de fecha anterior a la radicación de su demanda, allegada por la parte demandante en fls.285/315 del expediente pues el momento procesal con que contaba la parte para anexarlos era el de formulación de ese libelo introductorio. Tampoco son admisibles los documentos de fecha posterior, dado que no fueron objeto de solicitud y decreto de pruebas en oportunidad.

### Documental aportada por las partes

- Historia clínica del demandante<sup>6</sup>.
- Libro auxiliar general del 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre del mismo año, en el cual se registran pagos al demandante y deudas por él contraídas con la demandada<sup>7</sup>.
- Renuncia del demandante, fechada el 31 de julio de 2008. Indica que *“A PARTIR DEL PRIMERO DE AGOSTO VOY TRABAJAR PARA LA COPROPIEDAD EDIFICIO*

---

<sup>6</sup> Fls.10/52.

<sup>7</sup> Fls.66/67A.

*ALTOS DE SAN JUAN P.H. A TRAVÉS DE LA EMPRESA ALIANZA HUMANA SERVICIOS”<sup>8</sup>*

- Comprobantes de egreso y pagos efectuados al demandante<sup>9</sup>.
- Concepto Integral de Aptitud Laboral del señor Cartagena Alcaraz, fechado el 04 de agosto de 2008, elaborado por SUSMEDICOS S.A.<sup>10</sup>
- Reporte de novedades de trabajadores en EPS Comfenalco en que figura como empleadora AHS CTA – Alianza Humana al Servicio y de Suratep<sup>11</sup>.
- Certificado emitido por Porvenir S.A. sobre afiliación del hoy demandante ante esa administradora desde el 1 de septiembre de 2007<sup>12</sup>.
- Pagaré en blanco, sin numeración, suscrito por el representante legal de la demandada en favor de ESE Hospital San Rafael de Itagüí<sup>13</sup>.
- Compromiso de pago en formato de ESE Hospital San Rafael de Itagüí, suscrito por el representante legal de la demandada, no precisa fecha de suscripción, ni de inicio del compromiso, tampoco de su terminación, ni valor. En el concepto de la deuda se lee “gastos Médicos-Quirúrgicos -y hospitalizac de Jhon Fredy Cartage”<sup>14</sup>.
- Comprobante de egreso N°6-1-1648 del 30 de abril de 2008 en que se especifica el valor de \$2.425.475 por concepto de servicios médicos-hospitalarios y quirúrgicos del demandante y se detallan dos cpx, una por \$1.300.000 correspondiente a “accionistas J.J.Jllo” y otra por \$1.125.475 correspondiente a “Hospital San Rafael de Itagüí”<sup>15</sup>.
- Comprobantes de pago y recibos de caja en papelería de ESE Hospital San Rafael de Itagüí satisfechos por John Jairo Jaramillo Urrea, relacionados con servicios prestados a Jhon Fredy Cartagena Alcaraz<sup>16</sup>.
- Comprobante de egreso N°6-1-1649 del 30 de abril de 2008 y anexos, en que se especifica el valor de \$173.338 por concepto de auxilios médicos y hospitalarios del demandante y se discriminan una cpx por el valor total, correspondiente a “accionistas J.J.Jllo”. Se relacionan pagos efectuados ante el ÉXITO, ESE Hospital San Rafael de Itagüí y Metrosalud<sup>17</sup>.

---

<sup>8</sup> Fl.87. El motivo de la renuncia fue que iniciaría labores en otra empresa a partir del 1 de agosto de 2008, pero el retiro operó 3 días después.

<sup>9</sup> Fls.68/86, 88/89.

<sup>10</sup> Fl.90

<sup>11</sup> Fls.91/92.

<sup>12</sup> Fl.93.

<sup>13</sup> Fl.94.

<sup>14</sup> Fl.95.

<sup>15</sup> Fl.97.

<sup>16</sup> Fls.98/102. El 16 de abril John Jairo Jaramillo abonó \$1.300.000 a la cuenta de Jhon Fredy Cartagena.

<sup>17</sup> Fls.103/108.

- Comprobante de egreso N°002-39 del 31 de mayo de 2008 con anexos, en que se especifica el valor de \$28.200 por concepto de gastos médicos - terapias de ortopedia del demandante, señalando “cxp J.J. Jilo”<sup>18</sup>.
- Comprobante de egreso N°002-40 del 30 de junio de 2008 con anexos, en que se especifica el valor de \$56.400 por concepto de auxilios médicos- terapias de ortopedia del demandante, señalando “cxp J.J. Jilo”<sup>19</sup>.
- Comprobante de egreso N°6-1-1954 del 29 de julio de 2008 con anexos, en que se especifica el valor de \$124.700 por concepto de auxilios médicos y hospitalarios del hoy demandante en el Hospital San Rafael de Itagüí, señalando “cxp J.J. Jilo”<sup>20</sup>.
- Comprobante de egreso N°002-41 del 31 de agosto de 2008 con anexos, en que se especifica el valor de \$77.600 por concepto de auxilios médicos- terapias de ortopedia del demandante, señalando “cxp J.J. Jilo”<sup>21</sup>.
- Comprobante de egreso N°002-42 del 24 de septiembre de 2008 con anexos, en que se especifica el valor de \$56.400 por concepto de auxilios médicos- terapias de ortopedia del demandante, señalando “cxp J.J. Jilo”<sup>22</sup>.
- Liquidación definitiva de prestaciones sociales del señor Cartagena Alcaraz, en que se expresan como extremos temporales del contrato de trabajo, el 28 de enero de 2008 y el 3 de agosto del mismo año. Ascendieron a \$416.832, de los cuales descontaron \$920.000 de un préstamo, presentándose una cuenta por cobrar al trabajador de \$503.168. Se lee en ella que el trabajador no quiso firmar el documento<sup>23</sup>.
- Comprobante de egreso N° 6-1-1897 del 21 de junio de 2008, en que se especifica el valor de \$1.170.000 por concepto de servicio de construcción del 16 al 22 de junio de 2008 (\$150.000) ½ prima (\$300.000) y anticipo a prestaciones sociales (\$720.000), señalando “cxp J.J. Jilo”<sup>24</sup>.

### **Prueba Documental recibida por el despacho durante el debate probatorio**

- Historia laboral expedida por el ISS el 20 de abril de 2010, da cuenta de que el señor Cartagena Alcaraz cotizó ante esa entidad un total de 124.57 semanas entre el 21 de julio de 1992 y el 31 de enero de 2008<sup>25</sup>.
- Constancia de afiliación expedida por EPS Comfenalco el 27 de mayo de 2010<sup>26</sup>.

---

<sup>18</sup> Fls.110/113.

<sup>19</sup> Fls.114/120.

<sup>20</sup> Fls.121/134.

<sup>21</sup> Fls.135/138.

<sup>22</sup> Fls.139/144.

<sup>23</sup> Fl.145.

<sup>24</sup> Fls.146.

<sup>25</sup> Fl.169.

- Dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral N°35843 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 20 de abril de 2011, en que determinó que el señor Cartagena Alcaraz presenta una pérdida de capacidad laboral del 9.27% estructurada el 09 de abril de 2008 y es de origen laboral<sup>27</sup>.

- Dictamen de liquidación de cálculo de perjuicios<sup>28</sup>.

## **A) EXTREMO TEMPORAL FINAL DEL CONTRATO QUE VINCULÓ A LAS PARTES**

En el hecho primero del escrito de demanda se indicaron como extremos temporales de la relación que vinculó a las partes, el 26 de enero de 2008 y el 4 de agosto del mismo año<sup>29</sup>.

Al dar respuesta a este hecho, Multijara S.A. indicó que lo fueron el 28 de enero de 2008 y el 3 de agosto del mismo año<sup>30</sup>.

Pese a lo anterior, el A-quo fijó como extremo temporal inicial el 28 de enero de 2008 y de finalización del vínculo el 31 de julio de 2008, al no haberse acreditado por el demandante el alegado en la demanda y de conformidad con la fecha de la carta de renuncia por él aportada glosada a fl.87. En su recurso, la parte demandante pide considerar la confesión contenida en la respuesta al hecho primero de la demanda.

Para resolver, debe atenderse a lo que en materia de confesión reguló el CPC, vigente al momento en que se dio respuesta a la demanda, en su artículos 194,<sup>31</sup> 200<sup>32</sup>, y 201 según el cual, “toda confesión admite prueba en contrario”.

En el asunto bajo estudio, el representante legal de la demandada -quien también es abogado-. fue quien dio respuesta a la demanda; y salvo por la renuncia del demandante según la cual, iniciaría labores para otra empleadora desde el 1 de agosto de 2008<sup>33</sup>, no existen otras pruebas que contraríen la confesión presentada al contestar el hecho primero de la demanda.

---

<sup>26</sup> Fls.170/173.

<sup>27</sup> Fls.201/203, 248/249.

<sup>28</sup> Fls.207/209, 231/232.

<sup>29</sup> Fl.3

<sup>30</sup> Fl.59.

<sup>31</sup> “Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”. “Vale la confesión del representante legal, el gerente, administrador o cualquier otro mandatario de una persona, mientras esté en el ejercicio de sus funciones, en lo relativo a actos y contratos comprendidos dentro de sus facultades para obligar al representado o mandante.

La confesión por representante podrá extenderse a hechos o actos anteriores a su representación”.

<sup>32</sup> “La confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe. Cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado, aquéllos se apreciarán separadamente”.

<sup>33</sup> Fl.87.

No existe prueba de que efectivamente el demandante finalizara labores el 31 de julio de 2008, por el contrario, se acreditó con la liquidación de prestaciones sociales glosada en fl.145, que el 3 de agosto de 2008 es el extremo final de su contrato con el hoy demandado, y que inició relación laboral con el siguiente empleador el 04 de agosto de 2008<sup>34</sup>

Por último, al absolver interrogatorio de parte, el representante legal de la demandada reiteró que la relación finalizó el 4 de agosto de 2008<sup>35</sup> y, si bien nuevamente refirió que el demandante prestó el servicio de manera independiente, esto último no forma parte de lo debatido en esta segunda instancia.

Por lo dicho, asiste razón a la apoderada de la parte demandante en este punto del recurso, debiendo **modificarse** la sentencia recurrida, por haberse acreditado con la confesión del representante legal de la demandada, que el contrato que la vinculó con el demandante, **finalizó el 3 de agosto de 2008**.

## **B) PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES A CARGO DE LA DEMANDADA E INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE SU NO PAGO**

Declarada desde la primera instancia la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, así como sus extremos temporales, se desprende la obligación de quien ejerció como empleadora, de acreditar el pago de las acreencias laborales que se allí se derivan.

La primera pretensión de la demanda apunta a obtener el pago de cesantías, primas de servicio, vacaciones e intereses doblados sobre las cesantías<sup>36</sup>.

El A-quo despachó desfavorablemente esta pretensión, atendiendo al contenido del documento glosado a fl.89 del expediente, que da cuenta de un anticipo de prestaciones sociales por \$1.020.000 y de su autorización de posterior descuento, encontrando el juez, que lo causado por este concepto y vacaciones, es inferior al valor anticipado, no habiendo lugar a efectuar una nueva erogación en ese sentido.

Este punto de la sentencia que fue recurrido en apelación por la parte demandante, quien adujo que la demandada no acreditó su pago, y negó que, en calidad de trabajador, “*de su puño y letra*” hubiera autorizado deducciones a sus prestaciones sociales.

Para liquidar las prestaciones sociales y vacaciones, el A-quo tuvo en cuenta un salario mensual de \$600.000, el cual también es objeto del recurso de apelación de la parte demandante, quien expuso que según los recibos aportados por la demandada

---

<sup>34</sup> Fls.91/92

<sup>35</sup> Fl.164.

<sup>36</sup> Fl.3.

y el registro documental de fl.64A, la asignación era variable y que su empleadora confesó el pago neto de \$642.850 por este concepto. Esgrime que, calculado el promedio de lo percibido, el salario base para liquidar los referidos conceptos, asciende a \$678.666.

Para resolver, deben tenerse en cuenta, tanto las confesiones de ambas partes en ese punto, como la documental arribada al expediente. Así, se tiene que, en el hecho tercero de la demanda se afirma que el salario percibido fue el mínimo legal<sup>37</sup>, que para 2008 fue fijado en \$461.500. Al dar respuesta a este hecho, la demandada afirmó haber pactado con el trabajador un pago equivalente al salario mínimo, más subsidio de transporte, más un factor prestacional del 24%, por lo que neto, recibiría \$642.850; y que se efectuaba lo que denominó un pago semanal integral de \$150.000.

En cuanto a la calificación de salario integral, el A-quo determinó que, por su cuantía, no calificaba como tal, decisión que no fue recurrida por la demandada, única interesada en obtener un pronunciamiento distinto en torno a este punto, por tanto, no es pertinente que la Sala emita decisión al respecto.

De otro lado, como se desprende de la documental obrante en fls.66 y ss del expediente, denominado “ibro auxiliar-general” que reporta pagos efectuados al demandante, así como soportes de pago y comprobantes de egreso, que los acreditan, frente a ésta la parte demandante no formuló oposición, ni la tachó de falsa, salvo por los comentarios del escrito de sustentación del recurso de apelación, en que manifiesta que los anticipos efectuados al trabajador eran para que él asumiera el costo de los gastos médicos derivados del accidente que sufrió; afirmación no sustentada ni acreditada, si no que obedece a una conclusión a que arribó la apoderada del señor Cartagena Alcaraz, en momento procesal inoportuno.

En fls.67 y 67A, existe un concepto denominado “CONTRATO DE CONSTRUCCION” donde se reflejan 27 pagos semanales que oscilaban entre \$125.000 y \$181.818. El promedio de todos ellos, arroja la suma de \$150.814 semanales, para un promedio mensual **\$603.256** pagado al trabajador, a quien no se le efectuaban deducciones por concepto de cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social. En los soportes que siguen a ese documento, se informa que las cifras superiores a \$150.000, fueron objeto de una retención en la fuente de un 1%, no autorizada como descuento en salarios, por tanto, la Sala realiza el correspondiente cálculo sin atender a tal descuento, como se expresó.

Efectuada la liquidación de las prestaciones deprecadas en la demanda y el recurso de apelación, así como de las vacaciones, se concluye que, por todo el tiempo laborado, teniendo como extremos temporales el 28 de enero de 2008 y el 03 de agosto del mismo año (186 días) y un salario día de \$20.108, se causaron las siguientes sumas de dinero:

---

<sup>37</sup> Fl.3.

Cesantías:	\$311.674
Int. Cesantías:	\$19.324
Primas:	\$311.674 <sup>38</sup>
Vacaciones:	\$155.837
 Total:	 \$798.509

Valor que insiste la parte demandante, no le ha sido cancelada.

Pese a lo anterior, en fl.89 y 146 del expediente, reposa comprobante de egreso N° 6-1-1897 del 21 de junio de 2008, por valor de \$1.170.000, de los cuales \$1.020.000 obedece a “1/12 prima y anticipo a prestac. Sociales”, especificando que, por lo primero se entregaron \$300.000 y por lo segundo \$720.000. En este documento suscrito por el demandante, se lee “Autorizo Descontar el Anticipo a prestac. Sociales pendientes “720.000”

Las prestaciones sociales ascienden a \$642.672, valor previamente satisfecho por la demandada, por tanto, en principio, no hay lugar a ordenar nuevamente su pago, como pretende la parte demandante, quien se repite, no tachó como falsos los documentos aportados por la demandada, ni se opuso a su contenido en el momento procesal oportuno para ello, no pudiendo hacerlo extemporáneamente al recurrir la sentencia.

Pese a lo anterior, el art.254 del CST prohíbe a los empleadores efectuar pagos parciales del auxilio de cesantías antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados. Igualmente, señala que, de efectuar dichos pagos, perderán las sumas pagadas, sin que puedan repetir lo pagado.

De ahí que Multijara S.A. deberá, a título de sanción legal, satisfacer nuevamente el valor que entregó al demandante por lo que denominó anticipo de prestaciones (cesantías), por lo que pagará la suma de trescientos once mil seiscientos setenta y cuatro pesos (\$311.674), los cuales deberán indexarse a la fecha del pago, para que el acreedor la reciba en su valor real, y no depreciado por efecto de la inflación que es un hecho notorio en Colombia.

Asimismo, como la parte demandada no ha satisfecho las vacaciones, o al menos, de ello no obra prueba en el expediente, ni hay alguno donde conste autorización para descontar su valor de los préstamos que hizo su empleadora, se **revocará** la sentencia apelada en ese punto y se ordenará a la demandada pagar la suma de ciento cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y siete pesos (\$155.837), por ese concepto, que se indexará a la fecha del pago efectivo.

---

<sup>38</sup> Prima primer semestre: \$256.377. Prima segundo semestre: \$55.297

La demandada actualizará el valor de las vacaciones a la fecha del pago, empleando la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{V. ACTUALIZADO}$$

Los valores con los que ha de reemplazarse la fórmula deben ser:

El ÍNDICE FINAL certificado por el DANE que corresponde al de la fecha en que se efectúe el pago de las vacaciones;

El ÍNDICE INICIAL corresponde a la fecha de exigibilidad de las vacaciones, es decir, el 4 de agosto de 2008, por tratarse de prestación periódica.

El VALOR A INDEXAR corresponde al valor de las vacaciones.

Al no haberse incurrido en mora en el pago de la prima de servicios, ni cesantía, tampoco hay lugar al pago de la indemnización derivada de la misma, consagrada en el art.65 del CST. En ese punto se **confirmará** la sentencia recurrida.

### **C) INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS DERIVADA DE UNA CULPA PATRONAL EN LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE PADECIDO POR EL TRABAJADOR**

Si bien el A-quo encontró acreditado que el accidente padecido por el demandante fue de origen laboral, no interpretó lo mismo sobre la culpa patronal en que, insiste la parte demandante, incurrió Multijara S.A., aduciendo que no se le suministraron elementos de protección suficientes y necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones.

El art. 56 del CST establece que *“de modo general, incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a éstos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador”*. De ahí que se haya entendido que el empleador es el principal responsable de velar por la salud y la seguridad de sus empleados.

A su vez, los numerales 1, 2 y 3 del art. 57 del mismo código, consagran como obligaciones especiales del empleador:

“1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.

2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud”.

3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez (10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias”.

Tal y como advierte el demandante en su recurso, en el empleador, Multijara S.A., radicó el deber de prevención de accidentes y enfermedades de sus trabajadores, desarrollado normativa y jurisprudencialmente, y para cuando ocurrió el accidente al demandante en el año 2008, regía el Título III de la Ley 9 de 1979 y el Decreto 1295 de 1994, que implican para el empleador la creación y materialización de una verdadera política preventiva de riesgos.

Es así como el art.84 de la referida ley, consagró:

“Todos los empleadores están obligados a:

- a) Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro del proceso de producción;
- b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y demás normas legales relativas a Salud Ocupacional;
- c) Responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores de conformidad con la presente Ley y sus reglamentaciones;
- d) Adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores, mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma eficiente, de los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo;
- e) Registrar y notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo, así como de las actividades que se realicen para la protección de la salud de los trabajadores;
- f) Proporcionar a las autoridades competentes las facilidades requeridas para la ejecución de inspecciones e investigaciones que juzguen necesarias dentro de las instalaciones y zonas de trabajo;
- g) Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que estén expuestos los trabajadores y sobre los métodos de su prevención y control.

**PARAGRAFO.** Los trabajadores independientes están obligados a adoptar, durante la ejecución de sus trabajos, todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su propia salud o la de terceros, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones”.

En su art.122 dicha ley dispuso que: *“todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo”.*

Asimismo, el art.21 del Decreto 1295 de 1994 consagró las obligaciones del empleador en el Sistema de Riesgos Profesionales -hoy Laborales-. Entre ellas, en sus literales c y d relacionó las de *“Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo y “Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional<sup>39</sup> de la empresa, y procurar su financiación”*. En el parágrafo del referido artículo, se indicó que *“son además obligaciones del empleador las contenidas en las normas de salud ocupacional y que no sean contrarias a este decreto”*.

El capítulo VI de ese mismo decreto reguló la prevención y promoción de riesgos profesionales, indicando en el art.56 que es responsabilidad de los empleadores, quienes *“además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, son responsables de los riesgos originados en su ambiente de trabajo”*.

En ese sentido, el art.58 del mismo estatuto, consagró que *“Sin detrimento del cumplimiento de las normas de salud ocupacional vigentes, todas las empresas están obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas especiales de prevención de riesgos profesionales”* y, el inciso primero del art.62, estableció que *“los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada”*.

De lo dicho, se desprende que entre las obligaciones del empleador se encuentra no solo la de proveer elementos de protección adecuados conforme a la labor desarrollada; así como equipos y herramientas de trabajo en buen estado de conservación; si no también, para lo que interesa al proceso, las de suministrar capacitación sobre la actividad a desarrollar, en materia de prevención de accidentes y sobre el uso de herramientas, maquinarias y elementos de protección; teniendo a su cargo, como ha expresado esta Sala de Decisión Laboral en otras oportunidades, al adherirse a lo que sobre la materia ha desarrollado la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia<sup>40</sup>, en el sentido de adoptar las medidas íntegramente, entregando elementos de protección, capacitando sobre su utilización y vigilando su uso; que lo entregado al trabajador sea óptimo, no defectuoso, pues el riesgo de la ocurrencia del accidente de trabajo persiste y, adicionalmente debe garantizarse al trabajador que el medio en el que desarrolla su actividad (la infraestructura, el espacio, los bienes sobre los que se labora) también esté en óptimas condiciones.

Siendo así, la procedencia de la culpa patronal deprecada en la demanda, deriva de una responsabilidad subjetiva de aquel a quien se le endilga, por tanto, es del resorte del trabajador acreditar con suficiencia la referida responsabilidad, con miras a obtener una compensación económica con ocasión de la ocurrencia del accidente,

---

<sup>39</sup> A partir de la vigencia de la Ley 1562 de 2012, se conoce como Seguridad y Salud en el Trabajo.

<sup>40</sup> Ver entre otras las sentencias de rad. 16782 de 2001, rad. 22175 de 2004, Rad. 23489 de 2005 y Rad. 29644 de 2007

distinta a las reguladas por el Sistema de Riesgos Laborales -para cuando se presentó el accidente del demandante, de Riesgos Profesionales-.

Para el efecto, el art.216 del CST consagra:

“Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo”

Esa culpa suficiente comprobada exigida por la referida norma, ha tenido un amplio desarrollo por parte del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, cuyo precedente judicial establece que la demostración de la responsabilidad plena y ordinaria de perjuicios exige la prueba de tres elementos<sup>41</sup>, a saber:

- a) El daño originado por causa o con ocasión del trabajo;
- b) La culpa suficientemente comprobada del empleador; y
- c) El nexo de causalidad entre el daño y la culpa.

Ninguno de tales elementos puede presumirse, por no consagrarlo la norma en el esquema de responsabilidad subjetiva de culpa probada, siendo carga procesal del interesado en la declaración de la referida culpa, acreditar suficientemente la ocurrencia de estos tres elementos.

Una vez analizada la prueba recaudada en el proceso, la Sala arriba a las siguientes conclusiones en torno a la presencia de ellos en el caso del señor Cartagena Alcaraz:

#### **a) Daño originado por causa o con ocasión del trabajo**

En esta sede, se encuentra fuera de discusión que el accidente padecido por Jhon Fredy Cartagena Alcaraz el 09 de abril de 2008, se presentó con ocasión de las labores que entonces desempeñaba para Multijara S.A., situación demostrada con el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral N°35843, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 20 de abril de 2011<sup>42</sup>.

Este mismo documento establece el daño que el demandante pretende sea reparado por la demandada, al habersele ocasionado una pérdida de capacidad laboral del 9.27%.

---

<sup>41</sup> Ver entre otras, las sentencias SL 0355 de 2017, SL 4665 de 2018, SL 1047 de 2019, SL2206 de 2019, SL 2727 de 2020, SL5154 de 2020 y SL 190 de 2021.

<sup>42</sup> Fls.201/203, 248/249.

## **b) La culpa suficientemente comprobada del empleador**

Desestimó el A-quo la pretensión de pago de perjuicios materiales y morales ocasionados por el accidente sufrido por el demandante, al no haber encontrado acreditada la culpa alegada por él, quien insiste en su recurso de apelación, en que la ocurrencia del accidente se dio como consecuencia de que Multijara S.A. *“permitió la realización de un procedimiento riesgoso por sí solo, como es realizar actividades en alturas, sin suministrar los medios de protección necesarios al momento del accidente, debido a que un arnés o cuerda de vida, era el elemento de seguridad indicado para frenar la caída del actor, elemento que en ningún momento probó la demandada le hubiera suministrado, para evitar los daños que ha sufrido y padece en la actualidad el demandante”*<sup>43</sup>.

Como se dijo, al no bastar la simple afirmación de la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente, para que ésta se configure, han de verificarse las condiciones en que éste se produjo y la responsabilidad en que haya incurrido Multijara S.A., frente al trabajador.

Se duele el libelista en su demanda por la omisión del deber de suministrar herramientas de protección tendientes a evitar el accidente o disminuir sus consecuencias, lo que implica una negación indefinida que al tenor de lo dispuesto en el art.177 del CPC, no requiere prueba, invirtiendo la carga que originalmente en este tipo de procesos recae sobre la parte demandante, debiendo la empleadora acreditar el cumplimiento de los deberes que le asisten en materia de salud ocupacional<sup>44</sup>.

En ese sentido, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia ha expresado en sentencias como la SL 7056 de 2016 que

...“esta Sala ha determinado que al trabajador le atañe probar las circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia del infortunio; no obstante, por excepción, cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección se invierte la carga de la prueba y es *«el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con diligencia y precaución, a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores»*, con arreglo a lo previsto en los artículos 167 del Código General del Proceso y 1604 del Código Civil”.

En esa línea, Esa alta Corporación expresó en la sentencia SL 12707 de 2017 que, al invertirse la carga de la prueba, *“es el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con diligencia y precaución, a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores”*.

Para identificar cuáles eran las obligaciones que en materia de programas de salud ocupacional tenía la demandada en torno al demandante, es necesario conocer específicamente las funciones para las cuales éste fue contratado y si las

---

<sup>43</sup> FI.272.

<sup>44</sup> Hoy Seguridad y Salud en el Trabajo

desempeñaba en el momento de ocurrir el accidente. Esto, por cuanto tal y como advierte la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en providencias como la SL 5124 de 2020, en estos programas, los empleadores tienen deberes *i)* genéricos, *ii)* específicos y *iii)* excepcionales.

En dicha oportunidad, la Alta Corporación los explicó así:

“Los primeros están vinculados a las obligaciones generales de prevención que tiene el empleador en toda relación de trabajo, tales como el deber de información, de ejecución de medidas de protección y prevención de los riesgos laborales, identificar, conocer, evaluar y controlar los riesgos laborales, conforme lo disponen los artículos 21, 56 y 58 del Decreto 1295 de 1994, 57 del Código Sustantivo del Trabajo, entre otros. Así, por ejemplo, a efectos de la prevención de riesgos, los empleadores cuentan, entre otras, con las siguientes herramientas:

- (i) el panorama de factores de los riesgos existentes en la empresa (artículos 10, numeral 2, literal c) y 11 numeral 1 de la Resolución 1016 de 1989 - Hoy está previsto en los artículos 8 núm. 6, y 15 del Decreto 1443 de 2014, compilados en el Decreto 1072 de 2015), a través del cual los empleadores deben prever todos aquellos riesgos a los que pueden exponerse sus trabajadores conforme a su actividad económica, tareas específicamente contratadas, centros de trabajo, el número de trabajadores expuestos por parte del empleador, y en general que sean *inherentes* al trabajo, y
- (ii) las estadísticas de siniestralidad donde se documentan todos aquellos riesgos *expresados*, estos son, los accidentes de trabajo o enfermedades laborales que ocurran en el desarrollo del trabajo y que permiten al empleador elaborar planes de prevención que eviten su reincidencia (artículos 10, 11 y 14 de la Resolución 1016 de 1989 - regulado hoy en el numeral 7 y parágrafo 1.º del artículo 16, numeral 10 del artículo 21 e inciso 1.º del artículo 31 del Decreto 1443 de 2014, compilado en el Decreto 1072 de 2015).

Por su parte, los *específicos* tienen relación con los deberes concretamente establecidos en la ley y que reglamentan las obligaciones generales de prevención frente a la realización de una tarea puntual. Entre otras, está precisamente la Resolución 2400 de 1979 para la realización de trabajo en alturas.

Por último, los deberes excepcionales son aquellos que, si bien no están contemplados como un deber específico en cabeza del empleador, las circunstancias en las cuales se da la exposición a un riesgo obligan a este último a tomar medidas especiales de prevención y protección. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se le ordena al trabajador a realizar actividades en una zona territorial considerada como de alto riesgo de peligro o violencia por presencia de grupos armados al margen de la ley, y frente a lo cual si bien el legislador no establece una obligación específica de prevención, el empleador debe preverlo a fin de proteger la humanidad de la persona trabajadora y tomar las medidas de seguridad del caso”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> En ese mismo sentido se ha pronunciado en sentencias como la SL 16367 de 2014 y SL1265 de 2021.

En esa misma oportunidad, también se indicó la necesidad de analizar los controles que se deben ejecutar, consistentes en ocuparse de ejercer actividades de prevención en relación con el medio, en la fuente o en la persona<sup>46</sup>, cuya definición es la siguiente:

- controles en el medio: *“que corresponden a todos aquellos que deben ejercerse en el ambiente de trabajo, las medidas administrativas, la organización y ordenamiento de las labores, las capacitaciones sobre los riesgos laborales, y en general con relación a los elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores”.*

- controles en la fuente: *“corresponden a las medidas técnicas o controles de ingeniería que se emplean directamente en el origen de los peligros para lograr la eliminación o sustitución de los mismos y están asociados a todas las intervenciones que buscan disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos laborales, al modificar las condiciones en que se presenta el peligro, es decir al cambiar las características del origen que amenaza con generar el daño”.*

- controles en la persona: *“son todas aquellas medidas que protegen al trabajador de los daños que puede llegar a generar la materialización de un peligro, en su salud o integridad física, lo cual en la práctica se traduce en la entrega de los elementos y/o equipos de protección personal que previamente se han identificados como idóneos para la ejecución de las tareas a desarrollar y la interiorización que el trabajador ha hecho sobre su forma de uso”.*

Sobre el tema puntual del **trabajo en alturas**, desempeñado por el trabajador al momento del accidente en abril 9 de 2008, la legislación vigente: resoluciones 2400 y 2413 de 1979 y la Ley 52 de 1993 que aprobó el Convenio 167 de OIT., prevé que esta labor implica *per se* un alto riesgo potencial, de ahí que los deberes y controles a considerar en su ejecución se han incrementado progresivamente<sup>47</sup>.

Los arts. 188 a 191 de la Resolución 2400 de 1979, exigen a los empleadores deberes específicos de implementar controles en el medio, la fuente y la persona dirigidas a minimizar la potencialidad de ocurrencia del mismo, siendo necesario implementar mecanismos estructurales para evitar las caídas, adecuar *líneas de vida*, suministrar elementos de protección personal y ejercer vigilancia continua por parte del empleador sobre el cumplimiento de estos controles<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Resolución 2400 de 1979 -artículo 2-, el Decreto 614 de 1984 -artículo 24- y la Resolución 1016 de 1989 -artículo 4 y siguientes-

<sup>47</sup> Actualmente regulan el tema las Resoluciones 3673 de 2008, 0736 y 2291 de 2010, 1409 de 2012, 1903 de 2013, 3368 de 2014 y 1178 de 2017.

<sup>48</sup> ARTÍCULO 188. Para aquellos trabajos que se realicen a ciertas alturas en los cuales el riesgo de caída libre no pueda ser efectivamente controlado por medios estructurales tales como barandas o guardas, los trabajadores usarán cinturones de seguridad o ameses de seguridad, con sus correspondientes cuerdas o cables de suspensión. Las cuerdas o cables de suspensión, estarán firmemente atados al cinturón o arnés de seguridad y también a la estructura del edificio, torre, poste u otra edificación donde se realice el trabajo. Los cinturones o ameses de seguridad y sus cuerdas o cables de suspensión tendrán una resistencia de rotura no

Asimismo, el art.12 de la Resolución 2413 de 1979 impuso como obligaciones especiales i) Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal bajo sus órdenes lo dispuesto en el presente Reglamento y sus disposiciones complementarias, así como las normas instrucciones y cuanto específicamente estuviere establecido en la empresa sobre Seguridad e Higiene del Trabajo y ii) Instruir previamente al personal bajo sus órdenes, de los riesgos inherentes al trabajo que debe realizar especialmente en los que impliquen riesgos específicos distintos a los de su ocupación habitual, así como de las medidas de seguridad adecuadas que deben observarse en la ejecución de los mismos.

### Caso concreto

En cuanto a las funciones desempeñadas del trabajador, se tiene que en el hecho segundo de la demanda se indica que Jhon Fredy Cartagena Alcaraz fue contratado para desempeñar oficios “varios”<sup>49</sup>. Al dar respuesta a este hecho, la demandada lo aceptó como cierto, precisando que el demandante “presto un servicio material de varios en construcción”<sup>50</sup>.

En cuanto a la culpa de la empleadora, se expresó en el hecho quinto de la demanda que “al trabajador NUNCA le suministraron elementos de protección personal, tales como cinturón de seguridad”<sup>51</sup>. Al contestar a la demanda, Multijara S.A. lo negó, afirmando que “la empresa demandada si tenía elementos de seguridad y protección, como cascos de seguridad, arnés, cuerdas y lazos para amarrarse etc...además se insistía constantemente en que era una obligación usarlos; adujo que en este caso el demandante por bajar rápido para ir a su hora de almuerzo perdió el equilibrio y se cayó”<sup>52</sup>.

No existe prueba documental que permita determinar para cuáles funciones fue contratado específicamente el demandante; tampoco las declaraciones de las personas citadas como testigos detallan las funciones ejercidas por el señor

---

menor de 1.150 kilogramos y el ancho de los cinturones no será menor de 12 centímetros, con un espesor de 6 mm (1/4 pulgada), de cuero fuerte curtido al cromo, de lino o algodón tejido u otro material apropiado.

ARTÍCULO 189. Las cuerdas o cables de suspensión cuando estén en servicio estarán ajustados de tal manera que la distancia posible de caída libre del usuario será reducida a un mínimo de un metro, a menos que la línea de suspensión esté provista de algún sistema de amortiguación aprobada y que la autoridad competente considere su uso justificado.

ARTÍCULO 190. Las cuerdas salvavidas serán de cuerda de manila de buena calidad y deberán tener una resistencia a la rotura de por lo menos 1.150 kilogramos (2.500 libras). Los herrajes y fijaciones de los cinturones de seguridad deberán soportar una carga por lo menos igual a la resistencia de la rotura especificada para el cinturón.

ARTÍCULO 191. Todos los cinturones, arneses, herrajes y fijaciones serán examinados a intervalos frecuentes y aquellas partes defectuosas serán reemplazadas.

<sup>49</sup> Fl.3

<sup>50</sup> Fl.59.

<sup>51</sup> Fl.3.

<sup>52</sup> Fl.59.

Cartagena Alcaraz, sólo Fabián Alberto Osorio Acevedo, quien fue compañero de trabajo del demandante, manifestó que casi siempre le tocaba trabajar con él porque “cuando él era un ayudante de oficios varios y rotaba por toda la construcción”... “le tocaba estar en toda la unidad haciendo remiendos y pegando chapas abajo en el primer piso”.

Pese a ello, en cuanto a las circunstancias en que se produjo el accidente, se afirmó en el hecho cuarto de la demanda: “el día 9 de abril de 2008 el actor sufrió accidente de trabajo que consistió en lo siguiente, se encontraba bajando un andamio y perdió el equilibrio y se cayó. Quedando privado, y produciéndole como lesiones dislocación de su brazo, fractura de costilla y perforación de pulmón”<sup>53</sup>. Al dar respuesta a ese hecho, la demandada reconoció que era parcialmente cierto, pues el señor Cartagena Alcaraz “en ningún momento quedó inconsciente”<sup>54</sup>.

En el expediente no obra reporte del accidente de trabajo, pero las declaraciones de las personas que a continuación se enlistan, refirieron en primera instancia a las circunstancias del accidente, así:

- Rubén Darío González García, traído al proceso por el demandante, manifestó que cuando el accidente ocurrió, no trabajaba aún en el edificio en que se presentaron los hechos. El demandante le contó que “se había caído de un andamio y según no tenía el arnés, o sea como uno amarra para desarmar los andamios”<sup>55</sup>.

- Carlos Eduardo Henao, traído al proceso por el demandante, quien indicó “él estaba montado en un andamio de cuerpos, él por pasar por un cam se resbaló y cayó de tijera en tijera, y cayó al suelo”... “él cayo de un 5to piso y lo recibió las tijeras, se desmayó y yo lo saqué a la calle”... “cuando Jhon Fredy Cartagena me llamó para que le pasara el cam, cuando él ya se iba a bajar a almorzar, él se cayó, yo vi cuando él se cayó” ... “yo le pasé el cam a Jhon Fredy y cuando él lo estaba poniendo, no lo apoyó bien y se zafó y se cayó”<sup>56</sup>.

- Héctor Mario Caro Rivera, traído al proceso por la demandada, señaló: “el señor Jhon estaba trabajando en un andamio en horas de almuerzo y parece que por bajar rápido se cayó. En el momento no estaba presente cuando el actor cayó”<sup>57</sup>.

- Fabián Alberto Osorio Acevedo, traído al proceso por el demandante, manifestó: “resulta que yo estaba trabajando en la parte de abajo del sótano y en un momento al otro el señor Jhon Fredy estaba armando unos andamios y cuando menos pensé escuché unos estruendos, entonces yo subí al sótano Jhon Fredy estaba tirado en el piso”<sup>58</sup>.

---

<sup>53</sup> Fl.3.

<sup>54</sup> Fl.59.

<sup>55</sup> Fl.174.

<sup>56</sup> Fls.176/177.

<sup>57</sup> Fl.179.

<sup>58</sup> Fl.181.

Al preguntarse en torno a la presencia de **elementos de seguridad** con que contaba el hoy demandante al momento del accidente, el único testigo presencial de los hechos, señor Carlos Eduardo Henao, respondió: “ninguno, tenía solamente el casco”; al preguntarle la razón, expresó “porque en la obra no los tenían”, y al ser preguntado por los que la demandada les suministraba para laborar, contestó: “Lo único que teníamos en ese momento eran los cascos y unos guantes”. Y precisó que, la caída del señor Cartagena Alcaraz se presentó con ocasión, al no haber apoyado bien el cam que se le pasó para que descendiera del andamio, – no aclaró qué es un cam-.

Competía pues a la demandada acreditar el cumplimiento de sus deberes en los términos expresados, sin que se hubiera aportado prueba alguna en ese sentido, más allá de la manifestación del declarante Héctor Mario Caro Rivera, quien dijo ser el almacenista y encargado de entregar diariamente los elementos de protección a los trabajadores, entre ellos el demandante, de acuerdo a su trabajo. Dicho deponente refirió que entre los elementos que entregaba, había cascos, guantes, gafas de seguridad y arnés con su manila de amarre. Sin embargo, cuando se le indagó por lo entregado al demandante el 09 de abril de 2008, contestó “*yo le entregué al señor Jhon Cartagena en la mañana ese día del percance los elementos, pero no me acuerdo específicamente cuáles eran los elementos de trabajo*”.

De otro lado, Carlos Eduardo Henao, quien presencié accidente, manifestó que el demandante sólo portaba casco.

Siendo éste el más relevante de los deberes cuyo cumplimiento no se acreditó en el proceso, pues no se anexaron planillas, ni declaraciones que dieran cuenta clara e indubitable de la entrega de elementos de protección u otro medio de prueba del que se desprenda dicha entrega, no puede dejarse de lado que tampoco satisfizo la demandada la carga de demostrar siquiera la implementación del sistema de salud ocupacional diseñado al interior de la empresa, con controles en el medio, la fuente y la persona dirigidas a minimizar la potencialidad de ocurrencia del riesgo, ni la adopción de mecanismos estructurales para evitar las caídas o haber ejercido vigilancia continua sobre el cumplimiento de estos controles, como tampoco las medidas de corrección a que hubiera lugar.

Si bien, la demandada manifestó que continuamente celebraba reuniones para insistir en el manejo de elementos de seguridad, no se acreditó la entrega de éstos al hoy demandante, salvo por la precaria declaración no responsiva del señor Caro Rivera, y tampoco se allegaron elementos que acreditaran la celebración de las reuniones, sobre las cuales, no sólo se desconoce la existencia y periodicidad, si no el contenido y el nivel de comprensión de los trabajadores.

### **c) El nexo de causalidad entre el daño y la culpa**

No hay duda para la Sala, sobre la existencia del nexo causal entre el daño padecido por el demandante, correspondiente a su pérdida de capacidad laboral ocasionada por la ocurrencia del accidente, con la culpa de Multijara S.A.; de haber mediado el

comportamiento esperado de un empleador diligente, se habrían suministrado al demandante los elementos necesarios para ejecutar su función en las alturas, se le habría instruido sobre la necesidad de utilizarlos y se habría sido constante en la supervisión que se requería a fin de disminuir el riesgo que finalmente se materializó, o no se hubiera presentado el accidente, o este hubiera generado unas consecuencias diferentes en el estado de salud del señor Cartagena Alcaraz.

Dicho análisis conduce a **revocar**, en este aspecto, la sentencia conocida en apelación, porque, estando invertida la carga de la prueba, la demandada no formó el convencimiento judicial en torno al cumplimiento de su diligencia y cuidado en la ejecución del contrato del demandante y por tanto incurrió en la culpa deprecada en la demanda, que conlleva el pago de perjuicios correspondiente.

En cuanto a los perjuicios indemnizables, deprecados como “*indemnización material y moral*”, se tiene que deben ser acreditados por la parte demandante. Los perjuicios materiales corresponden al lucro cesante -consolidado y futuro-, y sobre los morales, reiteradamente ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que deben ser acreditados, sin que en el expediente obre prueba de los mismos, pues en los hechos de la demanda no refirió a ellos, y adicionalmente, prosiguió laborando.

Ha expresado la Alta Corporación en torno a ese punto:

*“Si bien el daño moral se ubica en lo más íntimo del ser humano y por lo mismo resulta inestimable en términos económicos, no obstante, a manera de relativa satisfacción, es factible establecer su cuantía. Para ello, es pertinente referir lo expuesto por esta Corte en sentencia CSJ SL 32720, 15 oct. 2008, que se reiteró en el fallo CSJ SL4665-2018, en cuanto a que la tasación del pretium doloris o precio del dolor, **queda a discreción del juzgador**, teniendo en cuenta el principio de dignidad humana consagrado en los artículos 1.º y 5.º de la Constitución Política, ya que según lo ha sostenido esta Corporación, en esa misma decisión, **«para ello deberán evaluarse las consecuencias psicológicas y personales, así como las posibles angustias o trastornos emocionales que las personas sufran como consecuencia del daño»**<sup>59</sup>.*

En el caso, se infiere de la historia clínica y del dictamen de PCL practicado por la JRCI glosados en los autos que, el accidente sufrido por el actor constituyó un evento traumático, no solo a nivel fisiológico, sino por la ansiedad y el dolor moral que le generó la imposibilidad de laborar durante tres meses, el someterse a todo tipo de exámenes médicos y de laboratorio, cirugía, terapias respiratorias, y terapias físicas para mejorar la movilidad del hombro derecho también por la incertidumbre de su situación de cara a futuro, dada la consecuente pérdida permanente parcial de capacidad laboral, que incluso lo obligó a cambiar de actividad económica, al punto de tener que limitarse en adelante a ejecutar labores en las que no requiera hacer esfuerzos, lo que para un ser humano acostumbrado a derivar su sustento de la realización trabajos de construcción, genera

---

<sup>59</sup> Sentencia SL 4570 de 2019, reiterada en la SL 721 de 2020.

sentimientos de profundo dolor moral e impotencia que se refleja en persistentes dolores en sus genitales, y en la columna.

Ese **perjuicio moral** se liquida en el equivalente a 10 SMLMV en el año 2021, en favor del aquí demandante.

La Sala liquida el **Lucro cesante consolidado y futuro**, con base en las fórmulas empleadas por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia. En el caso del lucro cesante futuro, se atendió a la tabla de vida probable de la Resolución 1555 de 2010 y teniendo como fecha de nacimiento del demandante el 04 de mayo de 1971<sup>60</sup>. El resultado de las operaciones arroja que la demandada adeuda veintiún millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos once pesos con noventa y siete centavos (\$21.227.411,97) por lucro cesante consolidado y quince millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos diecinueve pesos con cuarenta y seis centavos (\$15.450.419,46) por lucro cesante futuro, como se discrimina a continuación

Lucro cesante consolidado<sup>61</sup>

n	155	Número de Meses
i	0,005	
i	0,005	
%perdida	0,0927	en fórmula ingresar dividiendo por 100% (decimales)
Salario act.	\$ 981.608,00	Se actualiza con tabla SLMLV o con IPC
LCM	\$ 90.995,06	% de pérdida x (Salario actualizado)
233,28	\$ 21.227.411,97	

Lucro cesante futuro

n	379	Número de Meses fecha sentencia hasta expectativa probable de vida
n	379	
i	0,005	
i	0,005	
i	0,005	
%perdida	0,0927	en fórmula ingresar dividiendo por 100% (decimales)

<sup>60</sup> Pues si bien el documento glosado a fl.6 del expediente presenta enmendaduras, en fl.190 del expediente obra copia de la cédula de ciudadanía del demandante, la cual contiene esa información que no fue discutida por la demandada.

<sup>61</sup> Liquidado a la fecha en que se profiere esta providencia, con base en el último salario actualizado y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad laboral del 9.27% que presenta el demandante.

Salario act.	\$ 981.608,00	Se actualiza con tabla SLMLV o con IPC
LCM	\$ 90.995,06	
169,79	\$ 15.450.419,46	% de pérdida x (Salario actualizado)

Estas sumas de dinero serán indexadas a la fecha en que se efectúe el pago, para reducir el impacto que elementos como la inflación ocasionan depreciación del valor de la moneda. Para ello, empleará la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} - \text{VALOR A INDEXAR} = \text{V. ACTUALIZADO}$$

Los valores con los que ha de reemplazarse la fórmula deben ser:

El ÍNDICE FINAL certificado por el DANE que corresponde al de la fecha en que se efectúe el pago del capital;

El ÍNDICE INICIAL corresponde a la fecha de exigibilidad de cada capital.

El VALOR A INDEXAR corresponde al valor de cada capital.

**D) VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL DEL DEMANDANTE**

El último punto de apelación de la demandante es el valor asignado por el A-quo, por concepto de indemnización por incapacidad parcial, pues en su sentir, debe atenderse al salario realmente devengado durante la vigencia del contrato de trabajo y el porcentaje completo de la pérdida de capacidad laboral que presenta, es decir, el 9.27% y no sólo el 9%.

Si bien la condena al pago de la indemnización no fue objeto de apelación, con la finalidad de ilustrar a las partes, se pronuncia la Sala en torno a este concepto, precisando que las normas que lo regulan, son los arts.5, 6 y 7 de la Ley 776 de 2002.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> “ARTÍCULO 5o. INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. Se considera como incapacitado permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado.  
La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior.

ARTÍCULO 6o. DECLARACIÓN DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. La declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la incapacidad permanente parcial serán determinados por una comisión médica interdisciplinaria, según la reglamentación que para estos efectos expida el Gobierno Nacional.  
La declaración de incapacidad permanente parcial se hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para procurarse por medio de un trabajo, con sus actuales fuerzas, capacidad y formación profesional, una remuneración equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad.

Por su parte, el art.1 del Decreto 2644 de 1994, adoptó la tabla de equivalencias para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral como parte integrante del manual único de calificación de Invalidez, fijando el monto de la correspondiente a la pérdida del 9%, como la estructurada en el demandante, en 4 meses base de liquidación, sin que se haya contemplado el reconocimiento proporcional en caso de que la pérdida no equivalga un número entero, como ocurre en el caso del demandante, quien presenta una pérdida del 9.27%.

La demandada pagará al demandante la suma de dos millones cuatrocientos trece mil veinticuatro pesos (\$2.413.024), que se indexarán aplicando la fórmula ya expresada.

### III. EXCEPCIONES

La excepción formulada por la demandada se entiende implícitamente resuelta.

### IV. COSTAS

Sin costas en esta instancia. El recurso formulado por la parte demandante salió parcialmente avante.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### RESUELVE

**PRIMERO. MODIFICAR** el numeral primero de la parte resolutive de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, el 16 de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por Jhon Fredy Cartagena Alcaraz contra Multijara S.A en el sentido de indicar que el extremo final del contrato de trabajo que vinculó a las partes es el 3 de agosto de 2008.

**SEGUNDO. MODIFICAR** los numerales segundo y tercero de la parte resolutive de la referida providencia, en sentido de indicar que la demandada debe pagar al demandante dos millones cuatrocientos trece mil veinticuatro pesos (\$2.413.024), por

---

ARTÍCULO 7o. MONTO DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. *Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales, en una suma no inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación”.*

concepto de incapacidad permanente parcial. Se indexará el valor a la fecha de pago, como se dijo en la parte motiva de esta sentencia.

**TERCERO. REVOCAR** el numeral cuarto de la parte resolutive de la sentencia conocida en apelación, para en su lugar declarar la culpa patronal de Multijara S.A. en la ocurrencia del accidente padecido por el demandante el 09 de abril de 2008.

Multijara S.A., debe pagar a Jhon Fredy Cartagena Alcaraz las sumas de dinero que a continuación se detallan, las cuales deberá indexar a la fecha de su pago, según lo motivado en esta providencia:

- Ciento cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y siete pesos (\$155.837), por concepto de vacaciones.
- Veintiún millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos once pesos con noventa y siete centavos (\$21.227.411,97) por concepto de lucro cesante consolidado.
- Quince millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos diecinueve pesos con cuarenta y seis centavos (\$15.450.419,46) por concepto de lucro cesante futuro.
- El equivalente a diez Salarios Mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales.

**CUARTO.** Sin costas en esta instancia.

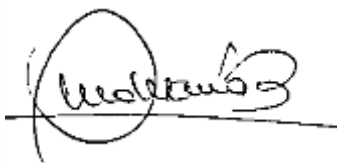
Se ordena notificar por estados y enviar copia de esta decisión al correo electrónico suministrado por los apoderados de las partes.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

<p>Certifico que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N°125 fijados hoy 19 de julio de 2021 a las 8:00AM</p> <p>_____</p> <p>El secretario</p>
--